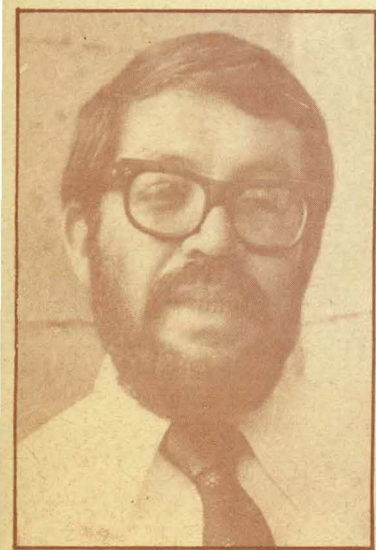


México,

En La Libertad

14 de Agosto - 82

POR MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA



¿Y de verdad alguien creyó que los banqueros y sus afines se quedarían tan tranquilos, viendo cómo este país, según se ha diagnosticado sin fundamento marcha a toda prisa hacia el socialismo? Pues no. No se han quedado quietos, ya han comenzado a reaccionar y las expresiones de su lucha se advertirán cada vez más claramente en el último tramo del sexenio.

Doś fracasos ruidosos parecieron indicar que la defensa de la libertad de empresa, tal como la conciben los banqueros y algunos dirigentes empresariales, no contaría con paladines suficientes. Primero se anunció y orquestó un paro de todo el comercio. Monterrey, Guadalajara, Puebla, contaron entre las ciudades cuyos, comerciantes mostraban mavor entusiasmo ante la idea

de desafiar de esa manera no al gobierno, para lo cual tendrían siempre derecho, al fin y al cabo son ciudadanos, sino sobre todo a la población misma, cuya mayoría resulta y resultará más en el futuro (si las estrategias privadas se estrellan en la frustración) ampliamente beneficiada.

Después del fallido paro, se anunció para el 24 de septiembre una magna reunión de dirigentes empresariales, abocada a discutir el futuro de la libertad en México. La prudencia se impuso en algunos líderes patronales, no sólo como virtud moral y política sino como ejercicio puramente pragmático. De seguro pesó en ellos la consideración de que las más anchas capas de la población estaban de acuerdo con la expropiación de la Banca y el control de cambios generalizado. Aunque a muchos de ellos les persuade la idea despectiva de que somos un pueblo globero, incapaz de entender lo que estaba pasando, no dejaron de ser sensibles a la opinión mayoritaria, y escogieron caminos diversos del enfrentamiento inmediato y directo.

Otras consideraciones debieron pesar, también, en el ánimo de los dirigentes empresariales que se opusieron a la suspensión de labores primero y luego a la junta cumbre de los empresarios. Una concierne a la relación estructural que hasta ahora se ha mantenido, en los planos económico y políticos entre los empresarios y el gobierno. Por lo menos desde 1940, pero con muchas manifestaciones anteriores, buena parte de la inversión pública se ha orientado a amontonar privilegios en beneficio de los patrones. La muy reprochada ineficiencia de las empresas públicas deriva, como bien se sabe, de los frecuentes y elevados subsidios con que contribuyeron a la rentabilidad de los negocios privados. El Estado, por su parte, se ha convertido en muy importante cliente y proveedor de bienes y servicios. Gobierno y empresarios son para decirlo en breve, buenos socios, que no deben romper sólo porque coyunturalmente uno de los lazos de buena relación fue angostándose hasta el rompimiento. Es preciso, conforme a la lógica empresarial que en este caso rigió las decisiones, no canjear lo más por lo menos.

De otra parte, estaba presente también, sin duda, la consideración que el público en general podía hacer respecto del papel de los bancos en la economía. Los pequeños y medianos industriales y comerciantes que sin ligas cercanas con los consorcios bancarios tenían que enfrentar cotidianamente la tiranía de los financieros no necesariamente debieron sentirse apenados por la expropiación. Antes al contrario, a poco andar vieron las primeras manifestaciones de una nueva actitud que les acarrearba beneficios, al disminuir las tasas de interés y los cobros leoninos por cuentas pobres de cheques. El riesgo que para la libertad les dijeron que esa medida significaba, se convirtió en los hechos en su contrario, pues muchos pequeños negocios respiraron libremente por primera vez en mucho tiempo al sentir disminuido el peso de sus obligaciones financieras, hasta ese momento cada vez más agobiantes.

Por todas esas, y otras razones, el caso es que no prosperó la estrategia del enfrentamiento cara a cara, que fue propuesta por algunos líderes empresariales sobre todo los que al mismo tiempo tenían intereses bancarios

(como los regiomontanos principalmente pero no sólo de la Banca Serfín y el Banpaís, y el ingeniero Manuel J. Clouthier, que simultáneamente es presidente del Consejo Coordinador Empresarial y vicepresidente del Banoro, Banco del Noroeste). Pero se trató sólo de un aplazamiento, a cuyos términos estamos llegando ya al parecer.

Varias operaciones configuran la estrategia que ahora está desplegándose. Incluye acciones nacionales e internacionales. Una de éstas, la más llamativa, fue la célebre carta que un grupo de 36 legisladores envió al presidente Reagan en vísperas de su encuentro con el presidente electo de México, don Miguel de la Madrid, y que fue hecha pública en *The New York Times* el 10. de octubre, al mismo día en que el presidente López Portillo aparecía en el foro político de mayor importancia en el mundo, la asamblea general de las Naciones Unidas. Se trata de un texto intervencionista, pero eso no extraña porque hay una vocación en tal sentido en vastos sectores de los Estados Unidos.

Lo que verdaderamente llama la atención es que se recojan los argumentos de los empresarios mexicanos más reaccionarios, esos que creen que la nacionalización bancaria y el control de cambios generalizado significa el camino hacia el socialismo. Los términos del catecismo del ingeniero Clouthier, publicados en la semana siguiente al primero de septiembre, aparecen como muy nítidamente recogidos en el alegato, por entero inadmisibles, de los congresistas norteamericanos. De ello puede colegirse, por lo tanto, que los impugnadores del nuevo orden de cosas han conseguido un apoyo transnacional cuya importancia no puede ser subestimada, porque ello entraña graves riesgos.

De otro lado, se han instrumentado también tácticas de información y de movilización que han de verse con extremo cuidado. El consorcio de la televisión comercial llamó a una especie de cruzada cívica, que resultaría ridícula si no escondiera tras su aparente prestancia propósitos de variada índole, ninguno de ellos acorde con el mejor interés nacional. Se trataba de conducir a los automovilistas, sobre todo, pero también a los peatones de la ciudad de México a una especie de **manifestación antimanifestaciones**. Para protestar contra el uso de las calles para expresar opiniones políticas mediante mítines y marchas, los usuarios de vehículos deberían haberse detenido ayer miércoles durante un minuto, encendido las luces y tocando las bocinas, mientras que los transeúntes silbarían. La demostración tendría varias consecuencias: en primer término, enseñar la capacidad de movilización de Televisa, que sólo fingidamente como es natural se ha mostrado neutra o hasta favorable a las medidas del primero de septiembre; en segundo término, poner en discusión el derecho de los ciudadanos a manifestar en las calles, apelando a elementales mecanismos de los usuarios de una urbe cada vez menos transitable; en tercer lugar, puesto que son las agrupaciones de izquierda las que suelen manifestar en las calles, propiciar una multitudinaria expresión de fe anticomunista de la que pudiera seguirse, sin solución de continuidad, una cacería de brujas que pusiera fin al absurdo, calificado así por los voceros de la derecha, de que hoy se gobierne para la izquierda (lo cual, dicho sea entre paréntesis, es por completo falso).

Por último, en el fin de semana anterior se congregaron, al fin, grupos de dirigentes empresariales en Monterrey. Los reunió un coloquio denominado **México en la libertad**. No pudieron escoger mejor sitio, no sólo por la tradición reaccionaria de amplias capas dirigentes privadas en esa ciudad, sino también porque el gobernador Alfonso Martínez Domínguez se ha descarado como defensor de esos intereses y no los públicos que como hombre del establecimiento político debería promover. Por supuesto que lo dicho explícitamente en ese foro no carece de legalidad, pues al fin y al cabo los empresarios son ciudadanos, tienen derecho a reunirse y a criticar al gobierno y hasta a plantearse modos de enfrentar lo que consideran peligroso para sus intereses.

Pero, por supuesto, todo ello debe hacerse de este lado del derecho, y no al margen de él. Toda la estrategia indica, al contrario, que se busca un enfrentamiento que no atenderá los límites de la actividad política legítima, sino que se ejercerán desde las presiones típicas de estos grupos, hasta instancias que más vale no imaginar.

Es hora de que el gobierno esté alerta. Pero es, también, hora de que lo estemos todos.